

4. El fortalecimiento del Estado en el Gobierno Nacionalista y Revolucionario

Daniel Granda Arciniega

INTRODUCCIÓN

En este artículo nos proponemos realizar un análisis sobre el significado histórico del gobierno militar presidido por el general Rodríguez Lara, en 1972-1976. Nuestra hipótesis central es que el mando militar construyó un proyecto político nacional, asumiendo la representación de los intereses de los sectores más avanzados de la burguesía, de los sectores medios, de los trabajadores, campesinos e indígenas, continuando una larga historia institucional de una posición nacionalista y reformista que viene desde la Revolución juliana y manteniendo una estrecha relación con los sectores académicos progresistas de la sociedad y con la Junta de Planificación. El proyecto político nacional girará en torno del Estado, como el centro de dirección política, bajo el mando militar, convertido en actor político y, por tanto, fortaleciendo al Estado.

El trabajo tiene dos partes. En la primera, se resalta el proceso de construcción del proyecto político “revolucionario y nacionalista” y su significado teórico e histórico. En la segunda, se recoge la ejecución del proyecto político nacional del gobierno militar, expresado en la posición política nacional e internacional, en algunos programas y en algunas obras emblemáticas, que nos permiten encontrar, en la realidad, su carácter y repercusión histórica. Como estudio de coyuntura, el trabajo es muy sintético, pero se sustenta en mucha información empírica que no se reproduce.

LAS MOTIVACIONES HISTÓRICAS DEL GOLPE DE ESTADO DE 1972

El golpe militar de febrero de 1972 fue producto de un proceso de preparación ideológico-militar con la participación de las tres ramas de las Fuerzas

Armadas, considerando la situación nacional e internacional. No fue, por tanto, ni un acto político espontáneo e improvisado, ni inspirado en experiencias externas o dispuesto por ninguna fuerza externa. No se inscribió en la tendencia de golpes militares anticomunistas de la región.

Las Fuerzas Armadas conocían la situación de atraso de la sociedad ecuatoriana, de desigualdad, de pobreza de la gran mayoría del pueblo. Conocían el atraso en que vivían muchas provincias y regiones del país, sobre todo, la población rural ecuatoriana. Este conocimiento no solo era el resultado de la experiencia empírica, por el hecho de haber recorrido todo el territorio ecuatoriano, sino el producto del estudio y el análisis en los cursos de Estado Mayor en la Academia de Guerra, durante dos años, en los que tenían una malla curricular estrictamente militar, pero también conferencias de Sociología, Economía Política, Ciencia Política, Derecho Internacional y Oratoria, impartidas por académicos progresistas que se encontraban en el debate sobre el desarrollo y sobre las teorías de la CEPAL. Muchas de estas materias pasarán a formar parte de la malla curricular a partir de 1978. Adicionalmente, conocían muy bien la experiencia de la Revolución cubana y sus intentos de expansión en América Latina, como la reacción militar de algunos países de la región, incluida la dictadura en el Ecuador de 1963, sus alcances y limitaciones en el contexto de la Guerra Fría. Además, el mando militar, en 1972, pasó la experiencia de la invasión peruana, en 1941, en calidad de cadetes y sintieron la indignación por dicha invasión, el dolor por la muerte de algunos de sus instructores, la impotencia de no poder actuar y la firme decisión de que no se repita.

El conocimiento de la realidad ecuatoriana puede ser un ejercicio exclusivamente académico, sin mayor trascendencia política. Un paso importante que supera lo estrictamente académico es la identificación de las fuerzas, los grupos e incluso de las familias y personas responsables de esa situación, tanto nacionales como internacionales. Este es el inicio de la transición del análisis neutral y pasivo del académico, al compromiso político y a la acción del político. Existía el convencimiento en los mandos militares de que un pueblo atrasado y pobre es la condición para el surgimiento de conflictos y antagonismos, de organizaciones y movimientos insurgentes y de la posible explosión social violenta. Por tanto, era necesario encontrar las causas de dicha situación para superarlas, antes de que sea demasiado tarde. La intervención militar fue percibida como una necesidad para impulsar el desarrollo nacional como el mejor mecanismo de integración y cohesión sociales, que evite la agudización de los antagonismos y el surgimiento de organizaciones insurgentes armadas.

Las causas del atraso, pobreza, miseria y marginalidad de gran parte del pueblo ecuatoriano estaban en los distintos sistemas de dominación existentes: 1. La dominación tradicional de sectores terratenientes en la Sierra, vinculados a la iglesia, basada en la gran propiedad improductiva de la tierra, que mantenían a la población campesina e indígena en condiciones de servidumbre. 2. La dominación oligárquica en la Costa, basada en un modelo agroexportador de gran concentración de la riqueza, que mantenían a la población campesina y montuvia bajo una explotación sistemática. 3. La presencia de empresas transnacionales de Estados Unidos que afectaban los intereses nacionales, dejando muy pocos recursos al Estado debido a la gran explotación de los recursos naturales. Esta apreciación se basaba tanto en la explotación histórica de recursos naturales como en las condiciones entregadas por gobiernos anteriores a empresas transnacionales para la exploración y explotación petrolera.

A partir del diagnóstico de la realidad o lo que los militares llaman “análisis de la situación”, el siguiente paso es la identificación de los actores políticos actuales, para constatar si la situación se mantendrá o tiene perspectivas de algún cambio. Este paso implica un mayor compromiso ya de carácter político. Las Fuerzas Armadas constataron que la dirigencia política del momento, expresada en Velasco Ibarra, presidente constitucional declarado dictador en 1970, era una representación de lo mismo; es decir, de la oligarquía y algunos sectores terratenientes de la Sierra. Velasco Ibarra, en su larga participación política, había demostrado la estrecha relación con dichos sectores. Además, el ministro de Defensa, Jorge Acosta Velasco, sobrino del presidente, había adoptado algunas decisiones en contra de las Fuerzas Armadas; mantenía una mala relación con el mando militar y utilizaba a las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas de los estudiantes. Fruto de estas malas relaciones, los oficiales de la Academia de Guerra se reunieron para protestar contra las decisiones del ministro de defensa y para exigir que sea separado del cargo. El ministro dispuso que se tomen presos a dichos oficiales, que se refugiaron en la hacienda La Balbina, donde fueron capturados y llevados al Penal. Al general Jácome, director de la Academia de Guerra, le dieron de baja.

En el Colegio Militar, donde era director el general Rodríguez Lara, se reunieron los oficiales. A la reunión se integró el ministro de defensa y el propio presidente Velasco Ibarra. Luego de recibir la exigencia de rectificación, y de liberar a los oficiales presos en el penal, el presidente Velasco Ibarra le dice al general Rodríguez Lara: “Tome el mando del país, yo ya dejo esto”. El general le respondió: “Ud. siga gobernando, rectifique los aspectos que aquí

se han señalado. Siga en la presidencia”.¹ Con esto, el general Rodríguez Lara salvaba al gobierno, por el momento. En julio de 1971 era ya un presidente caído. Había perdido todo respaldo popular e institucional. Los errores, contradicciones y corrupción de autoridades en el nivel medio, y la incapacidad del Gobierno de Velasco Ibarra eran evidentes y nadie salió en su defensa.

La hospitalidad de Velasco Ibarra con Fidel Castro y Allende, en reuniones de paso por Ecuador, era parte del protocolo diplomático y de su ambigüedad ideológica y no de una posición de izquierda sistemática. Velasco Ibarra como dictador civil y con su larga trayectoria era un instrumento de los sectores dominantes, y, por tanto, una amenaza para el cambio y el desarrollo nacional; además, se sentía agobiado, con pocas fuerzas para gobernar y carente de legalidad y legitimidad.

Por otro lado, Assad Bucaram, político de origen libanés que había ocupado cargos de representación popular en la provincia del Guayas y el país, por la Concentración de Fuerzas Populares, CFP, con un discurso demagógico y de barricada cargado de retórica y demagogia; había sido diputado y prefecto de la provincia del Guayas; alcalde de Guayaquil y constituyente en 1966, siendo elegido vicepresidente. Bucaram se presentaba como el candidato favorito para las elecciones de 1972. Igual que Velasco Ibarra, manejaba un discurso populista, aunque sin su preparación académica. Bucaram era más un hombre de barricada que de Estado. Los dos líderes, por su trayectoria política, eran una garantía para que el sistema de dominación continúe en la misma situación, así como una amenaza para la seguridad y el desarrollo nacionales, a pesar de su demagogia. Velasco Ibarra y Bucaram destruyeron la posibilidad de una vía de desarrollo organizado, planificado y con algunos cambios propuesto e iniciados por Galo Plaza.

Ante la ausencia de fuerzas políticas que garanticen los cambios necesarios en los modelos de dominación política, económica y social, las Fuerzas Armadas decidieron asumir el rol de actores directos de la política nacional. Con mucha claridad ideológica y política, definieron como “Razón de Estado” el nuevo rol del Estado en el desarrollo nacional. Esto significa: 1. Que el Estado debe intervenir en la propiedad y producción agraria. Para esto, se plantea la reforma agraria y colonización de 1973 y la Ley de Aguas. 2. Que el Estado debe asumir el control de la riqueza de los recursos naturales, incluido el petróleo, para invertirla en el desarrollo de la industria y la modernización. Para esto, hay que definir y asumir la propiedad de las “áreas estratégicas de la eco-

1. Guillermo Rodríguez Lara, *Testimonio de vida y del nacionalismo revolucionario. Entrevista por Enrique Ayala Mora* (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador —UASB-E— / Corporación Editora Nacional —CEN—, 2023), 85.

nomía nacional”, desarrollar la infraestructura nacional e impulsar la industria nacional, con la sustitución de importaciones, recogiendo los planteamientos de la CEPAL. 3. Asumir la defensa de las 200 millas de mar territorial.

El golpe militar del 13 y 14 de febrero de 1972 no generó resistencia ni de los partidarios de Velasco Ibarra, ni de Bucaram, ni de los partidos políticos; por el contrario, generó gran expectativa en el conjunto de la sociedad.

Desde el inicio del proceso, en las Fuerzas Armadas el líder reconocido era el general Rodríguez Lara. Esta situación es interesante por dos razones: 1. Dentro del ejército, el general Rodríguez Lara era de la especialización de ingeniería, considerada como no estrictamente militar, sino de apoyo a las operaciones propiamente militares. Sin embargo, obtuvo el reconocimiento de sus compañeros. 2. En el Comando Conjunto, el comandante de la Marina y de la Aviación eran oficiales de mayor antigüedad que Rodríguez Lara. No obstante, reconocieron el liderazgo del general.

El proceso que se inició en febrero de 1972 tenía un contenido “revolucionario y nacionalista”. Lo de revolucionario hay que entenderlo como una batería de cambios importantes en el modelo de desarrollo; como un cambio del modelo oligárquico y feudal. Lo de nacionalista hay que asumirlo como un paquete de programas y proyectos de desarrollo con las fuerzas nacionales en un proceso de sustitución de importaciones. “Sin influencias externas, nosotros éramos capaces de manejar nuestra situación y de enfrentar los problemas y necesidades de nuestro pueblo”, dice el general Rodríguez Lara.²

Este proyecto político nacional de los militares requería, para su ejecución, de una fuerte base popular de respaldo. Se logró apoyos explícitos de un sector de la izquierda, bajo la denominación de “apoyo crítico”. Sin embargo, la inmadurez de algunos sectores de la izquierda y sus contradicciones internas no facilitó la comprensión estratégica del proceso, a pesar de ser, como dice Cueva, una representación de los sectores más avanzados de la sociedad. No obstante, la huelga nacional de noviembre de 1975, inicio de la unidad de las centrales sindicales, en esencia fue de respaldo al gobierno militar, pero ya no tuvo los efectos esperados.

El proyecto político nacional de los militares, así entendido, necesitaba fuertes bases de legitimidad social y política, ya que claramente era ilegal. Los militares esperaban los apoyos políticos y sociales de la burguesía industrial, capas medias, campesinos e indígenas, con la ejecución del plan integral de transformación y desarrollo (PITD).

2. Ibid., 109.